

PROYECTO DE ACUERDO N°

(OCTUBRE____ DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE LA DECLARATORIA DE OFICIO DE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION DE COBRO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A FAVOR DEL MUNICIPIO CONSAGRADA EN EL ARTICULO 817 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 8 DE LA LEY 1066 DE 2006

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La presente iniciativa tiene por objeto la aplicación oficiosa de la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales a favor del municipio, de conformidad con lo regulado en el estatuto tributario nacional.

Es competente el honorable Concejo Municipal para presentar esta iniciativa, en virtud de la facultad residual otorgada en el parágrafo 2 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012.

La Constitución Política en su Artículo **ARTICULO 287** señala que *Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:+*

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Por su parte el DECRETO 624 DE 1989 estatuto tributario nacional, en su Artículo 817 modificado por el art. 86 de la Ley 788 de 2002 y el art. 8 de la Ley 1066 de 2006 señala: **Í Término De La Prescripción.** *La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria.*

La prescripción podrá decretarse de oficio, o a solicitud del deudor.+

De otro lado, la Ley 383 de 1997 en su art. 66 remitió expresamente la aplicación del estatuto tributario nacional a los municipios y distritos, en los siguientes términos: **%Administración y control.** *Los municipios y distritos, para efectos de las*

declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicaran los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional".

La norma anterior fue ratificada por el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 que precisa:
%Artículo 59. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.+

Por su parte el artículo 86 de la Ley 788 de 2002 modificó el artículo 817 del Estatuto Tributario como sigue: **Término de prescripción de la acción de cobro.** Modifícase el artículo 817 del Estatuto Tributario, el cual queda así:

"Artículo 817. **Término de prescripción de la acción de cobro.** La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas respectivas".

En forma más contundente se pronunció el Artículo 8°. De la Ley 1066 de 2006, en los siguientes términos: **%Modifíquese el inciso 2° del artículo 817 del Estatuto Tributario, el cual queda así:**

"La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, y será decretada de oficio o a petición de parte". Negrillas fuera de texto.

Como se podrá observar, la norma citada en precedencia fue más lejos que las anteriores, al contemplar, ya no, una facultad decretar de oficio la prescripción de que se viene hablando, sino que contempló un imperativo, con fuerza vinculante para los

Concejo
Santiago de Cali

entes territoriales, al determinar que la prescripción ~~%~~**será** decretada de oficio o a petición de parte

Sobre el instituto de la prescripción de la acción de cobro de deudas fiscales a favor de los entes territoriales, vale la pena traer la ilustración del Honorable Consejo de Estado en su Sala de Consulta y Servicio Civil, ante consulta elevada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los siguientes términos:

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, **Consejero ponente: CÉSAR HOYOS SALAZAR, Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil dos (2002).** Radicación número: 1446

Los interrogantes de la consulta son los siguientes:

¿Cuál es la normatividad sustancial y procedimental aplicable por parte de las entidades territoriales en materia de prescripción de obligaciones fiscales a su favor ?

¿Las entidades territoriales tienen autonomía para establecer términos de prescripción de las obligaciones a su favor diferentes a los previstos en el Código Civil o en el Estatuto Tributario o de conformidad con la respuesta al primer interrogante de la presente consulta dichas entidades están obligadas a acatar respecto de la prescripción, los términos y el procedimiento previsto en el Estatuto Tributario o el Código Civil ?

CONSIDERACIONES

3.1 La autonomía fiscal de los municipios y distritos es limitada.

El artículo 286 de la Constitución enumera dentro de las entidades territoriales a los distritos y los municipios y el 287 precisa que tales entidades tienen autonomía para la gestión de sus intereses ~~%~~dentro de los límites de la Constitución y la ley

La subordinación a la ley para el establecimiento de tributos y contribuciones departamentales y municipales se encuentra ratificada por los artículos 300-4 y 313-4 del ordenamiento superior.

La autonomía de las entidades territoriales en materia fiscal no es absoluta, sino antes bien, limitada por la ley, conforme lo ha expresado la Corte Constitucional desde la sentencia C-517 del 15 de septiembre de 1992, en la cual sostuvo lo siguiente:

%A propósito de este aspecto, la Corte juzga necesario poner de presente que la denominada tesis de la soberanía fiscal de las entidades territoriales no tiene asidero constitucional. Así se infiere de manera clara e inequívoca no solo del contexto sistemático de la Carta y en particular de los artículos citados, sino además de la misma historia de dicha iniciativa.

*La propuesta de consagrarla fue derrotada en la Asamblea Constitucional. Esos mismos elementos permiten sin reticencias afirmar que en la nueva Carta el Constituyente en esta materia conservó los lineamientos básicos del régimen anterior pues les reconoció una **autonomía fiscal limitada**. Es decir, su ejercicio se subordina a los términos que señale la ley.*

Concejo
Santiago de Cali

la Carta del 91 incrementó notablemente la capacidad tributaria de las entidades territoriales, sin embargo, en materia impositiva mantuvo la subordinación de su poder normativo a la ley, según claramente lo estipulan los artículos 300-4 y 313-4 de la Carta. En otros términos, la facultad impositiva de las entidades territoriales continúa supeditada a la ley y ha de ejercerse con estricta sujeción a los parámetros que en ella se fijan.

Esta jurisprudencia ha sido reiterada en varias sentencias de la Corte, como por ejemplo, las números C-478/92, C-004 de 1993, C-084/95, C-335/96, C-521/97, etc.

En ellas la Corte ha manifestado básicamente que la potestad impositiva de los departamentos y municipios tiene que ejercerse de acuerdo con la ley, pues si así no fuera, se implantaría el desorden con grave detrimento de los principios constitucionales de unidad del Estado (art. 1º) y de igualdad ante la ley (art. 13).

Expresa también que la ley puede determinar los elementos constitutivos del tributo, esto es, los sujetos activo y pasivo, los hechos y las bases gravables y las tarifas, o puede establecer un marco general del tributo o sus límites dentro de los cuales las asambleas o los concejos tienen la libertad para adoptar o no el tributo y fijar los contenidos concretos del mismo.

Además, destaca la autonomía de las entidades territoriales para la organización administrativa y el recaudo de sus tributos, así como la inversión de los recursos correspondientes.

Finalmente, la Corte reconoce competencia al legislador para restringir el poder tributario de las entidades territoriales, la cual a su vez, tiene como límites constitucionales las disposiciones de los artículos 294 y 317, referentes a la imposibilidad para el legislador de conceder exenciones sobre tributos de propiedad de tales entidades y de gravar la propiedad inmueble.

Ahora bien, el artículo 66 de la ley 383 del 10 de julio de 1997 por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando y se dictan otras disposiciones, se inscribe dentro de la facultad del legislador de regular aspectos de los tributos de los municipios y distritos, como son los atinentes al procedimiento, lo cual hace mediante la remisión a las normas respectivas del Estatuto Tributario y no contraría la autonomía de dichas entidades territoriales, debiendo éstas por el contrario, sujetarse a ellas.

Por tal razón, la Corte Constitucional, en sentencia C-232 del 20 de mayo de 1998, declaró exequible ese artículo, con los siguientes planteamientos:

En efecto, la aplicación de las normas procedimentales establecidas en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional a las entidades territoriales, tiene como finalidad la unificación a nivel nacional del régimen procedimental, lo cual no excluye las reglamentaciones expedidas por las Asambleas Departamentales y por los Concejos Distritales y Municipales en relación con los tributos y contribuciones que ellos administran, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 300 y 313 de la Carta. Ello al contrario de lo afirmado por los demandantes, constituye cabal desarrollo y concreción de uno de los principios constitucionales (preámbulo y artículo 1o.), según el cual Colombia se organiza en forma de República unitaria, por lo que la autonomía no puede realizarse por fuera de la organización unitaria del Estado, razón por la cual, en aras de darle seguridad, transparencia y efectividad al recaudo, administración y manejo de los impuestos y contribuciones, compete al legislador fijar un régimen procedimental único, aplicable tanto a nivel nacional, como a tributos del orden local.

Concejo
Santiago de Cali

conformidad con el ordenamiento superior, en caso de colisión entre normas procedimentales fijadas por los entes territoriales con aquellas dispuestas por el legislador, prevalecen estas últimas, por lo que en consecuencia, los órganos competentes de las entidades territoriales deberán ajustar y modificar su normatividad para hacerla concordante con la señalada por la ley.

Ahora bien, en cuanto hace a la autonomía fiscal y tributaria de las entidades territoriales, conviene recordar que de acuerdo con lo estipulado en los artículos 287, 300-4 y 313-4, respectivamente, estas gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley; y además, las Asambleas decretarán los tributos y contribuciones, y los Concejos los tributos y los gastos locales, de conformidad con la ley. En consecuencia, como se ha dejado expuesto, no puede aceptarse la tesis de la soberanía fiscal, ya que la autonomía de que gozan las entidades territoriales está supeditada a la ley.

De otro lado, cabe destacar que cuando la norma acusada consagra un procedimiento tributario uniforme, aplicable tanto a nivel nacional, como departamental, distrital y municipal, no está quebrantando el principio constitucional de la autonomía territorial, pues estos entes conservan todas aquellas facultades que en desarrollo del mandato constitucional les corresponde en materia fiscal, como lo son la organización administrativa, el recaudo, la conservación, la inversión y el manejo de sus recursos. No obstante, ello no equivale a que dichas atribuciones puedan entenderse en términos absolutos e ilimitados, pues dentro del Estado unitario y con base en las normas superiores, están sometidos a la Constitución y a la ley. Además, según el numeral 4o. del artículo 150 de la Carta Política, al Congreso le corresponde establecer las competencias de las entidades territoriales, así como regular los procedimientos tributarios, por lo que en consonancia con el artículo 287 superior, puede válidamente hacer extensiva la aplicación del procedimiento de carácter nacional a las entidades territoriales. En tal virtud, a juicio de la Corte, el legislador al actuar como lo hizo en el precepto impugnado, no excedió el límite de sus atribuciones, sino que, por el contrario, obró de conformidad con el ordenamiento constitucional.

Así las cosas, es necesario concluir que la aplicación de las normas de procedimiento establecidas en el Estatuto Tributario, a los tributos pertenecientes a los municipios y distritos, por disposición del artículo 66 de la ley 383 de 1997, no contraviene la autonomía de estas entidades territoriales y en consecuencia, las normas especiales de procedimiento que algunas de éstas hayan podido adoptar antes y aún después de la citada ley, no se imponen sobre las normas respectivas del estatuto, el cual por tener fuerza legal prevalece.

3.2 La prescripción de la acción de cobro en el Estatuto Tributario.

El decreto ley 624 del 30 de marzo de 1989, constituye, con las múltiples modificaciones y adiciones introducidas por las sucesivas reformas tributarias, como dice su título, *el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales*, denominada en la actualidad, *Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN*.

Sobre el tema de la prescripción de la acción de cobro de tales impuestos, el estatuto trae los artículos 817, 818 y 819, los cuales se encuentran dentro del Capítulo II *Formas de extinguir la obligación tributaria*, el cual hace parte del Título VII *Extinción de la obligación tributaria*, que a su vez pertenece al Libro Quinto *Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la Dirección de Impuestos Nacionales*.

Como se observa, las normas relativas a la prescripción como medio de extinguir la acción de cobro por obligaciones fiscales están incorporadas dentro de los

contiene el Estatuto Tributario, a los cuales remite el artículo 66 de la ley 383 de 1997.

Concejo
Santiago de Cali

Si bien la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos constituye un tema normativo de carácter sustantivo, como sucede en los Códigos Civil (arts. 2512 y 2535) y de Comercio, en el Estatuto Tributario se regula la prescripción extintiva de la acción de cobro con unas características diferentes a aquellos ordenamientos. En efecto, el Código Civil establece un término de diez (10) años para la prescripción de la acción ejecutiva, mientras el Estatuto Tributario reduce a cinco (5) años, el término de prescripción de la acción de cobro.

Se explica que en este último ordenamiento se haya incluido la prescripción dentro de las normas de procedimiento, por el hecho de que la acción de cobro la ejerce el Estado de manera coactiva, unilateral, por su poder impositivo, y éste fija un trámite que debe observar con celeridad y eficacia, de tal suerte que si no lo inicia en cierto tiempo, que la misma normatividad determina por seguridad jurídica, pierde la posibilidad de exigir el pago del tributo.

En materia civil o comercial se toma como base que las partes contratantes están en un plano de igualdad y, por consiguiente, la normatividad sustantiva fija los derechos y obligaciones en cuanto a sus distintos aspectos, entre los cuales están su nacimiento, duración y extinción (la cual comprende la prescripción), para que las partes sepan cuál es el contenido y alcance de sus compromisos y responsabilidades, y si sucede el incumplimiento de alguna de ellas, la otra parte está en libertad de acudir a un tercero imparcial, revestido de un poder soberano, el órgano jurisdiccional del Estado, para pedir que se le resarza en su derecho.

En cambio, en el campo del derecho tributario, no hay libertad para la adquisición de derechos y asunción de obligaciones sino que estas últimas son impuestas por el Estado de manera unilateral, por el poder que le ha conferido la comunidad, y en consecuencia, en caso de incumplimiento, él se reserva la potestad de hacer exigibles las obligaciones derivadas de los tributos, por sí mismo cuando la ley le ha conferido la jurisdicción coactiva, sin acudir a un tercero, para lo cual debe fijarse un procedimiento mediante el cual, con observancia de unas garantías para el obligado, le pueda exigir a éste el pago. En consecuencia, resulta lógico que dentro de ese procedimiento se establezca un plazo para la acción que le da iniciación al cobro coactivo, vencido el cual no se puede ejercitar.

Así las cosas, no sería acertado afirmar que por ser la prescripción de carácter sustantivo, la misma no pueda consignarse en las normas de procedimiento de la acción de cobro de la obligación fiscal, y que por tener ese carácter sustantivo no estaría comprendida dentro de la remisión a los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional, como establece el artículo 66 de la ley 383 de 1997, para de ahí inferir que cada municipio y distrito puede fijar un término para dicha prescripción respecto de sus tributos. No. Tal figura jurídica en este caso, aunque sustantiva, está regulada en la parte de los procedimientos y por ende, se halla comprendida en esa remisión normativa, debiendo ser observada por las mencionadas entidades territoriales.

Adicionalmente, cabe indicar que el citado artículo 66 al hacer la remisión de varias actuaciones a los procedimientos establecidos por el Estatuto Tributario, menciona **el cobro** de los impuestos municipales o distritales, dentro del cual se debe entender, en sana lógica, que se encuentran los elementos que hacen parte de esta actuación o se relacionan con ella, como la **acción de cobro** y su prescripción.

En síntesis, el término de prescripción de la acción de cobro de los tributos, tanto nacionales como municipales y distritales, es uniforme, es el establecido por el artículo



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Concejo
Santiago de Cali

tributario, para todos, sin que con ello se afecte la
entidades territoriales, y antes bien, sí se respetan los
principios de organización del país como una república unitaria y de igualdad
de los contribuyentes, además de darle a éstos seguridad jurídica respecto
de sus obligaciones.

LA SALA RESPONDE

4.1 La normatividad sobre prescripción de la acción de cobro de obligaciones fiscales a favor de los municipios y distritos es, en razón de la remisión hecha por el artículo 66 de la ley 383 de 1997, la contenida en los artículos 817 a 819 del Estatuto Tributario.

4.2 Los municipios y distritos no tienen autonomía para establecer un término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales a su favor, diferente del señalado en el artículo 817 del Estatuto Tributario, sino que deben sujetarse a éste.+

El PLAN DE DESARROLLO vigente en Cali para el periodo 2012-2015, en el CAPÍTULO 6, Buen Gobierno para Todos, en la línea 6.2 Componente: Gestión Fiscal, Contable y Financiera, señala como uno de sus objetivos *la gestión efectiva de ingresos, activos y pasivos así como su manejo contable*

En la Línea 6.2.1 Programa: Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados está orientado, entre otros objetivos, al *momento del pago oportuno de los contribuyentes, la gestión de la cartera*

Este proyecto de acuerdo contribuirá en gran manera con estos objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo, pues no solamente se hará la depuración de la cartera morosa, no contando con dineros que por ley no se pueden cobrar, y mucho menos incluyéndolos dentro del presupuesto, sino que también permitirá a los contribuyentes, quienes se han abstenido de pagar o de realizar convenios de pago debido a las elevadas sumas que se les presenta en las facturas de pago en las cuales se incluyen los años prescritos, totalmente alejados de su capacidad de pago, tendrían la posibilidad de realizar el pago o de acercarse a suscribir los convenios de pago respectivos.



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Concejo
Santiago de Cali

PROPOSICIÓN

Conforme lo establece la Ley 136 de 1994 concordante con el artículo 167 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Santiago de Cali, PROPONGO a la Honorable Comisión de Presupuesto del Concejo Municipal de Santiago de Cali, dar primer debate al Proyecto de Acuerdo POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE LA DECLARATORIA DE OFICIO DE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION DE COBRO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A FAVOR DEL MUNICIPIO CONSAGRADA EN EL ARTICULO 817 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 8 DE LA LEY 1066 DE 2006

Atentamente:

H.C. JUAN CARLOS OLAYA CIRO
Bancada Movimiento Político MIRA



Concejo
Santiago de Cali

PROYECTO DE ACUERDO N°

(OCTUBRE____ DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE LA DECLARATORIA DE OFICIO DE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION DE COBRO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A FAVOR DEL MUNICIPIO CONSAGRADA EN EL ARTICULO 817 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 8 DE LA LEY 1066 DE 2006

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las
Conferidas en el artículo 313 de la Constitución Nacional, la ley 136 de 1994,
modificada por la Ley 1551 de 2012

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger los postulados del artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 8°. de la Ley 1066 de 2006 respecto de la declaratoria de oficio de la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales a favor del Municipio.

ARTICULO SEGUNDO: A partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal declarará de oficio la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales a favor del Municipio, en los términos consagrados en el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 8°. de la Ley 1066 de 2006, y se interrumpirá con la notificación del mandamiento de pago.

ARTICULO TERCERO: No podrán ser objeto de convenios de pago, ni se podrá iniciar el cobro coactivo de las obligaciones fiscales a favor del Municipio respecto de las cuales se encuentren configurados los supuestos necesarios para declarar su prescripción.

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y Publicación.

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal a los ----- (---) días del mes de ----- de dos mil trece (2013).